



1. Según el artículo 159 de la Constitución española, ¿a cuántos miembros del Tribunal Constitucional propone el Consejo General del Poder Judicial?

- a) Dos miembros.
- b) Tres miembros.
- c) Cuatro miembros.
- d) Cinco miembros.

2. Según el artículo 159 de la Constitución española, ¿qué se requiere para ser nombrado miembro del Tribunal Constitucional?

- a) Ser juristas de alto prestigio reconocido.
- b) Ser juristas con experiencia en otros tribunales.
- c) Ser juristas de competencia reconocida en más de quince años de ejercicio profesional.
- d) Ser juristas de competencia reconocida en más de diez años de ejercicio profesional.

3. Según el artículo 159 de la Constitución española, ¿qué duración en años tendrá el periodo de designación de los miembros del Tribunal Constitucional?

- a) Cuatro años.
- b) Seis años.
- c) Ocho años.
- d) Nueve años.

4. Según el artículo 159 de la Constitución española, ¿cada cuánto se han de renovar por tercios a los miembros del Tribunal Constitucional?

- a) Cada tres años.
- b) Cada dos años.
- c) Cada cinco años.
- d) Cada cuatro años.

5. Según el artículo 159 de la Constitución española, los miembros del Tribunal Constitucional, en el ejercicio de su mandato, son:



- a) Independientes.
- b) Imparciales.
- c) Inamovibles.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

6. Según la Ley 50/1997, del Gobierno, entre las funciones del Secretariado del Gobierno no se encuentra:

- a) Velar por la correcta publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el "Boletín Oficial del Estado"
- b) La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
- c) La asistencia al ministro-Secretario del Consejo de ministros.
- d) Asistir a los Ministerios en el control de su eficacia.

7. Conforme dispone la Ley 50/1997, del Gobierno:

- a) Los conflictos de atribuciones entre Ministerios se resuelven por Acuerdo del Consejo de ministros.
- b) Los Secretarios de Estado son miembros del Gobierno.
- c) La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los diferentes Departamentos Ministeriales.
- d) Los vicepresidentes, cuando existan, no pueden ostentar simultáneamente la condición de ministros.

8. De su gestión política, el Gobierno responde:

- a) Individualmente ante las Cámaras.
- b) Solidariamente ante las Cortes Generales.
- c) Solidariamente ante el Congreso de los Diputados.
- d) Mancomunadamente ante las Cortes Generales.



9. Según el artículo 109 de la Constitución podrán recabar la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos:

- a) Únicamente el Congreso de los Diputados y sus Comisiones.
- b) Únicamente, las Cámaras y sus Comisiones.
- c) Únicamente las Cámaras.
- d) Únicamente el Senado y sus Comisiones.

10. En relación con los miembros del Gobierno y según el texto del artículo 110 de la Constitución Española:

- a) Tienen la facultad de hacerse oír en las Cámaras y sus Comisiones.
- b) Sólo tienen la facultad de hacerse oír en las Cámaras pero no en sus Comisiones.
- c) No podrán solicitar que informen ante las Cámaras el personal funcionario de sus Departamentos.
- d) Tienen derecho a voto en las Cámaras y en las Comisiones.

11. Las comunidades autónomas, respecto de los recursos tributarios del Estado:

- a) No pueden asumir ningún tipo de competencias.
- b) Pueden actuar como delegados del Estado en cuanto a la recaudación y la gestión, pero no la liquidación.
- c) Pueden actuar como delegados o colaboradores del Estado en cuanto a la recaudación, la gestión y la liquidación.
- d) Pueden actuar como delegados o colaboradores del Estado exclusivamente para la recaudación.

12. Para garantizar, entre otros, un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales en todo el territorio español:

- a) El Estado y las comunidades autónomas pueden establecer tributos especiales.
- b) Una ley orgánica establecerá el nivel mínimo y la forma de financiación para conseguirlo.
- c) Puede establecerse una asignación a las comunidades autónomas en los presupuestos generales del Estado.
- d) El Estado puede asumir directamente el ejercicio de competencias autonómicas.



13. En cuanto a la organización territorial del poder judicial, las comunidades autónomas:

- a) Pueden participar en la organización de las demarcaciones judiciales de su territorio al margen de lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, en aquellas instancias procesales que se agoten en el ámbito territorial de las comunidades autónomas.
- b) No pueden proponer al gobierno la fijación de los partidos judiciales de su ámbito territorial, de acuerdo con la independencia del poder judicial.
- c) No pueden participar en la organización de las demarcaciones judiciales de su territorio porque es una competencia reservada al Estado.
- d) Pueden participar en la organización de las demarcaciones judiciales de su territorio, de acuerdo con los supuestos y en las formas que indiquen en sus estatutos.

14. En materia de propiedad intelectual e industrial corresponde a las comunidades autónomas:

- a) El desarrollo legislativo y la ejecución.
- b) La legislación y la ejecución.
- c) La ejecución.
- d) Las bases.

15. Las leyes marco que atribuyen a las comunidades autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en materias de competencia estatal:

- a) Establecen la modalidad de control que los tribunales tienen que ejercer sobre las normas que dicten las comunidades.
- b) Establecen la modalidad de control que las Cortes Generales tienen que ejercer sobre las normas que dicten las comunidades autónomas, sin perjuicio de la competencia de los tribunales.
- c) Fijan los principios, las bases y las directrices a los cuales han de someterse las normas que dicten las comunidades autónomas.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.



16. El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión, con un número máximo de:

- a) 705 más el presidente.
- b) 705, incluido el presidente.
- c) 649 diputados.
- d) Representantes en una proporción igual a cada estado miembro.

17. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

- a) La Comisión Europea decide sobre todas las nuevas leyes y actuaciones de la Unión Europea.
- b) La Comisión Europea propone nueva legislación, mientras que el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo toman la decisión final sobre toda la legislación de la Unión Europea.
- c) El Consejo Europeo, compuesto por los presidentes y primeros ministros de los países de la Unión Europea, adopta la legislación de la Unión Europea.
- d) La Comisión Europea decide unilateralmente sobre la normativa de la Unión Europea.

18. Señale la afirmación correcta en relación a los Comisarios de la Unión Europea:

- a) Los comisarios representan los puntos de vista de sus respectivos países.
- b) Para ser comisario hay que ser primero funcionario en el propio país.
- c) Los comisarios son propuestos por sus gobiernos nacionales y deben ser aprobados por el Parlamento Europeo.
- d) Los comisarios son escogidos de entre los ministros de los gobiernos nacionales.

19. Los miembros del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones asisten:

- a) Al Consejo Europeo y al Consejo.
- b) Al Parlamento, al Consejo Europeo y a la Comisión.
- c) A la Comisión y al Consejo.
- d) Al Parlamento, al Consejo y a la Comisión.



20. La renovación parcial de los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia tiene lugar:

- a) Cada dos años.
- b) Cada seis años.
- c) Cada tres años.
- d) Cada cuatro años.

21. Según el artículo 41 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, ¿cómo son elegidos los diputados del Parlamento?

- a) Por sistema electoral.
- b) Por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
- c) Mediante un sistema de representación proporcional.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

22. Según el artículo 41 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, ¿qué dura el mandato de los diputados del Parlamento?

- a) Dos años.
- b) Tres años.
- c) Cuatro años.
- d) Cinco años.

23. Según el artículo 44 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, ¿qué órgano judicial puede exigir la responsabilidad penal a los diputados del Parlamento de las Illes Balears, en caso de flagrante delito?

- a) El Tribunal Constitucional.
- b) El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, dentro del ámbito territorial de la comunidad autónoma.
- c) La Sala Penal del Tribunal Supremo, fuera del ámbito territorial de la comunidad autónoma.
- d) El órgano jurisdiccional predeterminado por la ley.



24. Según el artículo 45 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, el Parlamento tiene:

- a) Diputados.
- b) Un presidente y diputados.
- c) Un presidente, diputados y una diputación permanente.
- d) Un presidente, una mesa y una diputación permanente.

25. Según el artículo 45 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, ¿qué norma regulará la composición y las reglas de elección del Parlamento?

- a) Un reglamento del Parlamento.
- b) Una ley ordinaria del Gobierno.
- c) Un decreto del Gobierno.
- d) Una ley ordinaria del Estado.

26. La adscripción a las consejerías del Gobierno de las Illes Balears de los entes del sector público instrumental corresponde:

- a) Al presidente del Gobierno, mediante decreto.
- b) Al consejero competente en materia del sector público.
- c) Al consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
- d) Al consejero competente en la materia, mediante orden.

27. Los consejeros del Gobierno de las Islas Baleares reciben el tratamiento de:

- a) Señor o Señora.
- b) Excelentísimo o Excelentísima.
- c) Muy Honorable.
- d) Muy Ilustrísimo o Muy Ilustrísima.



28. Indique la respuesta incorrecta:

- a) Los consejeros son órganos directivos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
- b) En el Gobierno de las Illes Balears, los consejeros sin cartera carecen de responsabilidades ejecutivas.
- c) El cese de los consejeros del Gobierno de las Illes Balears surtirá efectos desde el momento de la publicación del correspondiente decreto del presidente en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
- d) Los consejeros del Gobierno de las Illes Balears cesan por la decisión del presidente.

29. En el Gobierno de las Illes Balears, en caso de vacante del cargo de consejero:

- a) El presidente, mediante decreto, debe encomendar transitoriamente a otro miembro del Gobierno el despacho de los asuntos de la consejería.
- b) El presidente, mediante resolución, debe encomendar transitoriamente a otro miembro del Gobierno el despacho de los asuntos de la consejería.
- c) Asume el cargo el consejero de mayor edad.
- d) El vicepresidente asume el despacho de los asuntos de la consejería.

30. Corresponde a los órganos directivos la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:

- a) Ejecutar y desarrollar los planes de actuación.
- b) Establecer los planes de actuación.
- c) Dirigir los recursos humanos de su consejería.
- d) Asignar los recursos necesarios para la ejecución de los planes de actuación.

31. Indique la respuesta incorrecta. En el Gobierno de las Islas Baleares:

- a) La estructura básica de cada consejería debe aprobarse mediante decreto del Consejo de Gobierno.
- b) Corresponde a los consejeros suscribir contratos en nombre de la Administración autonómica.
- c) Los secretarios generales controlan la gestión del presupuesto de la consejería.
- d) Corresponde al secretario general la gestión del registro general, medios materiales y servicios auxiliares de cada consejería.



32. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears, las disposiciones generales se ajustan a la siguiente jerarquía:

- a) Primero, los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno o por el presidente, y segundo, las órdenes de los consejeros.
- b) Primero, los decretos por el presidente; segundo, los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno, y tercero, las órdenes de los consejeros.
- c) Primero, los decretos por el presidente; segundo, los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno; tercero, las órdenes de los consejeros, y cuarto, los acuerdos del Consejo de Gobierno.
- d) Primero, los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno, y según los acuerdos del Consejo de Gobierno y los decretos del presidente.

33. En el Gobierno de las Illes Balears, corresponde al Consejo de Gobierno:

- a) Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
- b) Disolver el Parlamento y convocar anticipadamente elecciones.
- c) Ejercer la potestad reglamentaria mediante la aprobación de órdenes.
- d) Designar al representante de las Illes Balears en el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.

34. El presidente de las Illes Balears cesa:

- a) Por la denegación de la cuestión de confianza.
- b) Por acuerdo unánime de los miembros del Consejo de Gobierno.
- c) Por petición del Gobierno del Estado.
- d) Por la presentación de una moción de censura.

35. ¿En qué supuesto de cese del presidente de las Illes Balears éste no puede continuar en el cargo hasta que su sucesor haya tomado posesión?

- a) La pérdida de la condición de diputado del Parlamento.
- b) La aprobación de la moción de censura.
- c) La dimisión comunicada por escrito al presidente del Parlamento.
- d) Después de las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares.



36. ¿Cuál es el número de firmas necesario para el ejercicio de la iniciativa legislativa popular?

- a) No menos de 500.000 firmas acreditadas.
- b) 500.000 firmas acreditadas.
- c) Más de 600.000 firmas acreditadas.
- d) 600.000 firmas acreditadas.

37. ¿En cuál de las siguientes materias es procedente la iniciativa legislativa popular?

- a) En materias tributarias.
- b) En materias de carácter internacional.
- c) En materias relativas a la prerrogativa de gracia.
- d) Ninguna de las materias anteriores pueden ser objeto de una iniciativa legislativa popular.

38. ¿Puede el Gobierno subdelegar la facultad de dictar legislación delegada?

- a) En ningún caso.
- b) Sí, siempre que lo autorice la ley de delegación.
- c) Sí, siempre que delegue en autoridades administrativas.
- d) No, salvo que delegue en órganos administrativos.

39. Un estatuto de autonomía tiene que ser aprobado:

- a) Por ley ordinaria.
- b) Por ley orgánica.
- c) Por real decreto.
- d) Por decreto ley.



40. Indica la respuesta incorrecta relativa al reglamento de necesidad:

- a) El reglamento de necesidad implica la suspensión de la legalidad establecida.
- b) El reglamento de necesidad tiene carácter transitorio en el ordenamiento jurídico.
- c) El reglamento de necesidad sólo se puede dictar por razón de la concurrencia de circunstancias extraordinarias.
- d) El reglamento de necesidad tiene carácter de permanencia en el ordenamiento jurídico.

41. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta correcta respecto a los datos de carácter personal a los que se pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión:

- a) La entidad u órgano encomendado no tiene la condición de responsable del fichero o tratamiento.
- b) La entidad u órgano encomendado tiene la condición de encargado del tratamiento.
- c) La entidad u órgano encomendante tiene la condición de encargado del tratamiento.
- d) La entidad u órgano encomendante debe dictar una resolución para determinar qué órgano será el responsable del tratamiento.

42. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda los convenios cuyos compromisos económicos superen:

- a) Los 600.000 euros dentro de los tres meses siguientes a su suscripción.
- b) Los 600.000 euros dentro de los tres meses siguientes a contar desde la finalización de la vigencia del convenio.
- c) Los 300.000 euros dentro de los tres meses siguientes a su suscripción.
- d) Los 300.000 euros dentro de los tres meses siguientes a contar desde la finalización de la vigencia del convenio.



43. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los casos previstos como motivos de abstención, los interesados podrán promover la recusación en los siguientes casos (señale la respuesta correcta):

- a) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
- b) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia.
- c) En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución.
- d) En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.

44. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con el fin de contribuir a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes, las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente:

- a) Que constituyan nuevas infracciones o sanciones, o alteren la naturaleza o límites de las que la ley contempla.
- b) Que no constituyan nuevas infracciones o sanciones, pero alteren la naturaleza o límites de las que la ley contempla.
- c) Que no constituyan nuevas infracciones o sanciones, ni alteren la naturaleza o límites de las que la ley contempla.
- d) Que constituyan nuevas infracciones o sanciones, pero no alteren la naturaleza o límites de las que la ley contempla.

45. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores (señale la respuesta correcta):

- a) Podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones no pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.
- b) Podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.
- c) No podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones no pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.
- d) No podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.



46. Según el art. 106.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuándo se produce la caducidad de los procedimientos de revisión de disposiciones y actos nulos iniciados de oficio?

- a) Transcurrido el plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución.
- b) Transcurrido el plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución.
- c) Transcurrido el plazo de seis meses desde que se dictó el acto o la disposición nula.
- d) Transcurrido el plazo de tres meses desde que se dictó el acto o la disposición nula.

47. Según el art. 107.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la declaración de lesividad afecta a:

- a) Los actos favorables para los interesados que sean anulables.
- b) Los actos desfavorables para los interesados que sean anulables.
- c) Los actos favorables para los interesados que sean nulos.
- d) Los actos desfavorables para los interesados que sean nulos.

48. El art. 107.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, dispone que:

- a) Transcurrido el plazo de cuatro años desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
- b) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
- c) Transcurrido el plazo de cuatro años desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
- d) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.



49. ¿Qué límite temporal establece el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, para rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos?

- a) No se establece ningún límite.
- b) Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
- c) Un mes desde que se dictó el acto administrativo.
- d) Seis meses desde que se dictó el acto administrativo.

50. Según el art. 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- a) Los recursos administrativos contra una disposición general que se funden únicamente en la nulidad de la misma podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.
- b) Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.
- c) Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general deberán interponerse ante el órgano que dictó dicha disposición.
- d) Los recursos administrativos contra una disposición general que se funden únicamente en la nulidad de la misma deberán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

51. Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuál es el plazo para dictar resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas?

- a) Cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
- b) Diez días.
- c) Diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.



52. Según el art. 36.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la resolución declaratoria de responsabilidad en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas:

- a) No pondrá fin a la vía administrativa.
- b) Pondrá fin a la vía administrativa.
- c) Pondrá o no fin a la vía administrativa en función del órgano que la dicta.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

53. Según el art. 64.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el acuerdo de iniciación de los procedimientos de naturaleza sancionadora contendrá:

- a) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.
- b) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento.
- c) Identificación del instructor y del Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.
- d) Identificación del instructor, con expresa indicación del régimen de recusación del mismo.

54. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el art. 65.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo al inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial:

- a) El procedimiento iniciado se archivará si los particulares presuntamente lesionados no se personan en el plazo establecido.
- b) El plazo de alegaciones no será inferior a diez días.
- c) Para iniciar el procedimiento será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el artículo 67.
- d) El acuerdo de iniciación se notificará al instructor y al secretario del procedimiento.



55. Según el art. 65.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el plazo para presentar alegaciones en los procedimientos de responsabilidad patrimonial será de:

- a) Cinco días.
- b) Diez días.
- c) Quince días.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

56. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar desde:

- a) La fecha de recepción o conformidad del contrato.
- b) La fecha de formalización del contrato.
- c) La fecha de aprobación del contrato.
- d) La fecha de pago del contrato.

57. No son causa de resolución del contrato:

- a) La prórroga del contrato.
- b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
- c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
- d) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.



58. Señale la respuesta incorrecta:

- a) Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato.
- b) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
- c) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla.
- d) El subcontratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra.

59. De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, respecto de las empresas no comunitarias:

- a) Adicionalmente, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá exigir a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras que abran una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones.
- b) Adicionalmente, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá exigir a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras que estén inscritas en el Registro Mercantil.
- c) Adicionalmente, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá exigir a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras que tributen en España.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.



60. De acuerdo con el artículo 219.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la duración de un acuerdo marco:

- a) No podrá exceder de cinco años.
- b) No podrá exceder de tres años.
- c) No podrá exceder de seis años.
- d) No podrá exceder de cuatro años.

61. Las situaciones del personal laboral

- a) No existen.
- b) Serán las mismas que los funcionarios.
- c) Serán las establecidas por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación.
- d) Los convenios colectivos determinarán la aplicación del capítulo de situaciones administrativas de los funcionarios al personal incluido en su ámbito de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

62. El régimen disciplinario del personal laboral

- a) Se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación y en lo no previsto se regirá por el régimen disciplinario de los funcionarios.
- b) Se regirá por lo previsto en el título del régimen disciplinario de los funcionarios públicos, y en lo no previsto en dicho título se regirá por la legislación laboral.
- c) El código penal español únicamente prevé delitos cometidos por funcionarios públicos, no por el personal laboral.
- d) Cada administración determinará que régimen disciplinario se aplica al personal laboral.



63. El capítulo I del título II, de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears regula

- a) Los entes competentes en materia de función pública.
- b) Órganos competentes en materia de función pública.
- c) La escuela balear de administración pública.
- d) Órganos y entes competentes en materia de función pública.

64. El título III, de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears regula

- a) Personal funcionario de carrera y funcionario interino.
- b) Personal laboral fijo y temporal.
- c) Personal eventual.
- d) Todas las anteriores son correctas.

65. El título IX de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

- a) Está dividido en tres capítulos: el primero regula los deberes del personal funcionario; el segundo, su régimen retributivo y de la Seguridad Social, y el tercero, el régimen de incompatibilidades.
- b) Está dividido en tres capítulos: el primero regula los derechos del personal funcionario; el segundo, su régimen retributivo y de la Seguridad Social, y el tercero, sus deberes y el régimen de incompatibilidades.
- c) Está dividido en cuatro capítulos: el primero regula los derechos del personal funcionario; el segundo, su régimen retributivo y de la Seguridad Social, el tercero, sus deberes, y el cuarto, el régimen de incompatibilidades.
- d) Está dividido en cuatro capítulos: el primero regula los derechos del personal funcionario; el segundo, su régimen retributivo, el tercero, el régimen de la Seguridad Social, y el cuarto, sus deberes y el régimen de incompatibilidades.



66. A efectos del Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones, tiene la consideración de subvención cualquier disposición dineraria llevada a cabo por las entidades del sector público a favor de personas públicas o privadas, que cumpla los siguientes requisitos:

- a) Que se lleve a cabo sin contraprestación directa de los beneficiarios.
- b) Que se sujete al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por realizar, o la concurrencia de una situación, con el deber del beneficiario de cumplir las obligaciones materiales y formales establecidas.
- c) Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o de interés social o de promoción de una finalidad pública.
- d) Todas las respuestas son correctas.

67. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la normativa estatal y autonómica de subvenciones, no tienen la consideración de subvención, y deben regirse por la normativa específica que les sea aplicable, los siguientes supuestos:

- a) Las aportaciones dinerarias a favor de entidades autónomas, empresas públicas, consorcios sometidos al ordenamiento autonómico y fundaciones del sector público autonómico destinadas a financiar la actividad de estos entes en el ámbito de sus funciones.
- b) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Social .
- c) Las prestaciones contributivas y no contributivas del sistema de la Seguridad Social.
- d) Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C que regula la Ley 14/2002, de 5 de junio.



68. Señale la respuesta incorrecta. Están excluidas del ámbito material del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de subvenciones:

- a) Las ayudas que consistan en la cesión de bienes o derechos o en la prestación de servicios, cuya adquisición o contratación se haya realizado con la finalidad exclusiva de entregarlos o prestarlos a terceras personas.
- b) Las ayudas inherentes a la financiación de determinados proyectos de actuación en el marco de los planes anuales del turismo sostenible a que se refiere la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible.
- c) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

69. De acuerdo con el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de subvenciones, no deben aplicarse los principios de publicidad y concurrencia:

- a) Cuando la concesión o la cuantía de las subvenciones esté impuesta por una disposición normativa.
- b) Cuando las subvenciones tengan asignación nominativa en los presupuestos del ente público que las concede.
- c) En general, cuando por las características del beneficiario o de la actividad subvencionada no sea posible promover su concurrencia pública, así como cuando se acrediten razones de interés público, social, económico y humanitario, o cualquier otra razón debidamente justificada que dificulte esta concurrencia.
- d) Todas las respuestas son correctas.



70. En las entidades de derecho público dependientes, quiénes son los órganos competentes para la concesión de subvenciones:

a) En las entidades de derecho público dependientes, los órganos de dirección de estas entidades, de acuerdo con lo que prevé su normativa reguladora, previa autorización del órgano colegiado superior de la entidad en los casos de las subvenciones en las que excepcionalmente no sea posible promover la concurrencia pública de acuerdo con lo establecido en el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones.

b) En las entidades de derecho público dependientes, los órganos de dirección de estas entidades, de acuerdo con lo que prevé su normativa reguladora, previa autorización del Consejo de Gobierno en el caso de las subvenciones en las que excepcionalmente no sea posible promover la concurrencia pública de acuerdo con lo establecido en el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones.

c) En las entidades de derecho público dependientes, los órganos de dirección de estas entidades o el órgano que determinen las bases reguladoras, previa autorización del Consejo de Gobierno en el caso de las subvenciones en las que excepcionalmente no se puedan aplicar los principios de publicidad y concurrencia por las características especiales del beneficiario, o de la actividad subvencionada, no sea posible, objetivamente, promover su concurrencia pública, así como cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, o cualquiera otra razón debidamente justificada que dificulte esta concurrencia.

d) En las entidades de derecho público dependientes, los órganos de dirección de estas entidades o el órgano que determinen las bases reguladoras, previa autorización del órgano colegiado superior de la entidad en el caso de las subvenciones en las que excepcionalmente no se puedan aplicar los principios de publicidad y concurrencia de acuerdo con lo establecido en el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones.

71. Si un ciudadano solicita información a la Administración y son de aplicación los límites de derecho de acceso previstos en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno pero estos límites no afectan a la totalidad de la información:

a) Se ofrecerá acceso parcial sin indicar al solicitante que parte de la información ha sido omitida.

b) Nunca se concederá el acceso parcial a la información.

c) Se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite de acceso, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.

d) Siempre se concederá acceso parcial a la información a la que no le afecte la limitación prevista en el artículo 14.



72. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) No tiene personalidad propia por ser un órgano dependiente del Ministerio competente en Función Pública.
- b) Tiene personalidad jurídica propia pero no plena capacidad de obrar
- c) Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
- d) No tiene personalidad jurídica propia pero sí independencia funcional.

73. ¿Qué Dirección General coordina y supervisa que los diferentes responsables de cada ámbito de información la publiquen y la revisen periódicamente la información en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears?

- a) La Dirección General de Coordinación, Relaciones con el Parlamento, Derechos y Diversidad.
- b) La Dirección General de Relaciones Exteriores.
- c) La Dirección General de Servicios Sociales.
- d) La Dirección General de Participación, Transparencia y Voluntariado.

74. Si un ciudadano no encuentra la información que busca en el Portal de transparencia, ¿qué puede hacer para obtenerla?

- a) Solicitar dicha información a la administración, ejerciendo el derecho de acceso a la información pública, mientras el procedimiento no haya finalizado.
- b) Presentar un recurso contencioso-administrativo.
- c) Solicitar dicha información a la administración, ejerciendo el derecho de acceso a la información pública.
- d) Presentar un recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

75. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, indique cual de las siguientes respuestas no supondrá una limitación para ejercer el derecho de acceso:

- a) La política económica y monetaria.
- b) Los intereses económicos y comerciales.
- c) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
- d) La protección de la agricultura.



76. Cuando un documento se presenta ante una oficina de asistencia en materia de registros:

- a) Se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado. También se anotará la salida de documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
- b) Se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado. También podrá anotarse la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
- c) Se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado. También se anotará la salida de documentos oficiales dirigidos a particulares.
- d) No se realizará ningún asentamiento.

77. ¿Cuál de estas funciones no está asignada a las oficinas de asistencia en materia de registros según el Real decreto 203/2021?

- a) La anotación, en su caso, de los asientos de salida de los documentos.
- b) La anotación de los documentos en el registro electrónico.
- c) La práctica de notificaciones mediante la aplicación NOTIB.
- d) La identificación o firma electrónica del interesado, salvo en el caso de personas jurídicas.

78. Indique la respuesta correcta. Los documentos en soporte no electrónico presentados a través de las oficinas de asistencia en materia de registros:

- a) Se digitalizarán y se devolverán los documentos originales.
- b) Se digitalizarán y se incorporarán al expediente administrativo electrónico.
- c) Se digitalizarán y se custodiarán si en ese momento no es posible devolver el documento original.
- d) Todas las respuestas son correctas.



79. ¿Qué debe hacer una oficina de asistencia en materia de registros si debe enviar un documento a otra Administración y el tamaño de éste excede la capacidad que permite el Sistema de Interconexión de Registros (SIR)?

- a) El envío puede sustituirse por la puesta a disposición de los documentos, previamente depositados en un repositorio de intercambio de ficheros.
- b) El documento debe archivararse dentro de un dispositivo interno de memoria USB (pen drive) y enviarse a través de un ordenanza.
- c) El envío debe sustituirse por la puesta a disposición de los documentos, previamente depositados en un repositorio de intercambio de ficheros.
- d) Todas las respuestas incorrectas.

80. Entre las funciones de las nuevas oficinas de asistencia en materia de registros (OAMR), ¿se encuentra la de recibir la documentación presentada por una persona jurídica?

- a) No, porque las personas jurídicas no pueden presentar documentos en papel.
- b) Sí.
- c) No, sus funciones son las previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- d) Todas las respuestas son correctas.

81. ¿Quién puede adherirse al convenio de colaboración en materia de interoperabilidad telemática entre las administraciones públicas del ámbito territorial de las Illes Balears?

- a) Es un convenio cerrado, sin posibilidad de adherirse al mismo.
- b) Cualquier administración pública del estado español.
- c) Los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas, en todo caso.
- d) Todas son incorrectas.



82. ¿Cómo se puede realizar la adhesión de un nuevo órgano al convenio de colaboración en materia de interoperabilidad telemática entre las administraciones públicas del ámbito territorial de las Illes Balears?

- a) Mediante el envío de una solicitud a la Dirección General de Modernización y Administración Digital, junto con un certificado del órgano correspondiente de la adopción de la decisión de la adhesión.
- b) Mediante el envío de una solicitud a la Consejería de Fondo Europeo, Universidad y Cultura, junto con un certificado de la Dirección General de Modernización y Administración Digital que autoriza técnicamente esta adhesión.
- c) Mediante una resolución del consejero de Fondo Europeo, Universidad y Cultura donde se autoriza la adhesión del nuevo órgano al convenio.
- d) Mediante una resolución del consejero de Fondo Europeo, Universidad y Cultura donde se autoriza la adhesión del nuevo órgano al convenio, previo informe vinculante de la Comisión Superior de Sistemas de Información en Tecnología y Comunicaciones que depende de la Dirección General de Modernización y Administración Digital.

83. ¿Quién no forma parte de la Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración en materia de interoperabilidad telemática entre las administraciones públicas del ámbito territorial de las Illes Balears?

- a) El coordinador del departamento de Nuevas Tecnologías del Consell de Formentera.
- b) El Director General de Modernización y Administración Digital de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
- c) El jefe de la Sección de Sistemas de Información y Seguridad del Consell de Eivissa.
- d) Todos los anteriores cargos forman parte de la misma.

84. Según el convenio de colaboración en materia de interoperabilidad telemática entre las administraciones públicas del ámbito territorial de las Illes Balears, ¿qué actuaciones se compromete a llevar a cabo la Dirección General de Modernización y Administración Digital?

- a) Gestionar la Plataforma de Intermediación de las Illes Balears (PINBAL).
- b) Establecer y fijar los protocolos de actuación y órganos adecuados para proveer eficientemente de información a las solicitudes enviadas mediante la plataforma.
- c) Alojar la plataforma de interoperabilidad de las Illes Balears.
- d) Mantener y mejorar la plataforma de intermediación de las Illes Balears.



85. En materia de interoperabilidad telemática, ¿qué son los servicios propios?

a) Son aquellos que permiten a los entes adscritos al convenio de colaboración en materia de interoperabilidad telemática entre las administraciones públicas del ámbito territorial de las Illes Balears, compartir e intercambiar información mediante la Plataforma de Interoperabilidad de las Illes Balears .

b) Son aquellos servicios que ofrece la Administración General del Estado y que pueden consultarse mediante la Plataforma de Interoperabilidad de las Illes Balears.

c) Son aquellos servicios cuya consulta no requiere acceder a la Plataforma de Interoperabilidad de las Illes Balears, ya que son accesibles directamente a través de la intranet.

d) Son aquellos servicios de verificación y consulta de datos prestados por un órgano de la propia Administración Pública.

86. ¿Qué se considera discriminación indirecta por razón de sexo?:

a) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pueda ser tratada, teniendo en cuenta su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

b) La situación en que una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutras pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro sexo, salvo que esta disposición, criterio o práctica se pueda justificar objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar esta finalidad sean necesarios y adecuados.

c) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pueda ser tratada, sin tener en cuenta su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

d) La situación en que una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutras pone a personas de diferentes sexos en desventaja particular respecto de personas de los otros sexos, teniendo en cuenta que esta disposición, criterio o práctica se pueda justificar objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar esta finalidad sean necesarios y adecuados.



87. ¿Cuál es el órgano responsable de adoptar planes y programas conjuntos de actuación para que la AGE y las administraciones de las comunidades autónomas cooperen para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las competencias respectivas?:

- a) La Conferencia Sectorial de la Mujer.
- b) El Instituto de la Mujer.
- c) El Observatorio Estatal de Igualdad.
- d) La Conferencia Estatal de la Mujer.

88. ¿Cuál de estas acciones no se prevé como un deber de las administraciones públicas, en el ámbito de las competencias respectivas y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres?:

- a) Remover los obstáculos que implican la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres al acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.
- b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin detrimento de la promoción profesional.
- c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional.
- d) Promover la presencia equilibrada de mujeres de todas las edades en los órganos de selección y valoración.

89. ¿En qué casos no es necesario que se adjunte un informe de impacto de género a la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público?:

- a) Si se trata de profesiones neutras
- b) En casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo
- c) En casos en que en convocatorias similares ya haya cualquier prohibición de discriminación por razón de sexo.
- d) En casos de urgencia, si no hay una prohibición de discriminación por razón de sexo.



90. ¿Cuáles de estos principios es imperativo en un protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo de una administración pública?:

- a) El compromiso político de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
- b) La instrucción a todo el personal sobre su deber de respetar la dignidad de las personas y el derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.
- c) El tratamiento público de las denuncias de hechos que puedan constituir acoso sexual o acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo que establece la normativa de régimen disciplinario.
- d) El anonimato de las personas responsables de atender a quienes formulan una queja o denuncia.

91. ¿Cuántos delegados de prevención son necesarios en la Administración Autonómica de las Islas Baleares con más de 5000 trabajadores?

- a) Al menos un delegado de prevención.
- b) Entre cuatro a cinco delegados de prevención.
- c) Ocho delegados de prevención.
- d) Sólo es necesario un delegado de personal.

92. ¿A qué están obligados los delegados de prevención con arreglo al artículo 37 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales?

- a) A cumplir el deber de ejecución de las medidas preventivas.
- b) A cumplir con secreto profesional respecto a las informaciones a las que tengan acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.
- c) Están obligados a formarse por cuenta propia.
- d) A seguir las indicaciones y instrucciones del empresario.



93. ¿Cuáles son las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud?

- a) Elaborar el plan de prevención y evaluar las consecuencias en la aplicación.
- b) Evaluar los riesgos inherentes a los puestos de trabajo.
- c) Promover la aplicación de medidas correctoras.
- d) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa, y promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la prevención de los riesgos en la empresa.

94. ¿Cuándo podrá el personal y sus representantes acudir a la Inspección de trabajo y seguridad social?

- a) Cuando consideren que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y salud en el trabajo.
- b) No pueden recurrir porque no es función de la Inspección de trabajo y seguridad social.
- c) Cuando hayan pasado tres días desde el último día sometidos a riesgo grave e inminente.
- d) Siempre que aporten el plan de prevención implementado.

95. ¿Qué establece el artículo 41 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales?

- a) Los fabricantes, pero no los importadores deben cumplir con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgo laborales.
- b) Los fabricantes, los importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador.
- c) Los fabricantes y suministradores deben cumplir con las disposiciones reglamentarias.
- d) El empresario debe hacer cumplir la ley a los fabricantes, importadores y suministradores de herramientas y servicios.



96. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, indica la respuesta incorrecta en relación a las disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos de las personas en relación al tratamiento de sus datos personales.

- a) Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado.
- b) El encargado del tratamiento deberá facilitar un e-mail de contacto.
- c) El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden.
- d) El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio.

97. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, indica la respuesta correcta en relación a la prescripción de las sanciones impuestas en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 y de esta ley orgánica:

- a) Las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros prescriben a los tres años.
- b) Las sanciones impuestas por infracciones graves prescriben en el plazo de 2 años.
- c) Las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros prescriben a los dos años.
- d) Las sanciones impuestas por infracciones graves prescriben en el plazo de 3 años.

98. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas:

- a) Al deber de custodia.
- b) Al deber de confianza.
- c) Al deber de confidencialidad.
- d) Al deber de sigilo.



99. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando:

- a) Cuando proceda a realizar actuaciones de mantenimiento.
- b) Cuando contrate a otro encargado.
- c) Cuando contrate a otro delegado de protección de datos.
- d) Cuando lleve a cabo la rectificación o supresión.

100. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en:

- a) Una norma de Derecho de la Unión o en esta ley orgánica.
- b) Esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.
- c) En esta ley orgánica..
- d) Una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.

101. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece, que suponga un coste desproporcionado, para ejercer el derecho de acceso:

- a) La solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte.
- b) La solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el 50% del exceso de costes que su elección comporte.
- c) La solicitud será considerada excesiva, por lo que el responsable del tratamiento debe informarle de los medios disponibles para ejercer su derecho.
- d) La solicitud será considerada excesiva, por lo que el responsable del tratamiento está facultado a no responderla.



102. La vigilancia y el control de la salud del personal se llevará a cabo:

- a) Al finalizar la relación laboral con la empresa.
- b) Respetando siempre el derecho a la intimidad, a la dignidad de la persona y confidencialidad de la información relacionada con su estado de salud.
- c) La Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales no establece ningún criterio.
- d) A criterio técnico.

103. A efectos de la Ley 15/2022, de 12 de Julio, integral para la Igualdad de trato y la no discriminación, se entiende por discriminación por error:

- a) Cuando una persona o grupo en el que se integra, y dada su relación con otra, es objeto de un trato discriminatorio.
- b) Es aquella que se fundamenta en una apreciación incorrecta hacia las características de la persona o personas discriminadas
- c) Se produce cuando una persona es discriminada de forma simultánea o consecutiva por dos o más causas de las previstas en esta ley.
- b) Se produce cuando concurren o interactúan diversas causas de las previstas en esta ley, generando una forma específica de discriminación.

104. Indique la respuesta correcta en relación con las quejas y sugerencias:

- a) En cada consejería deben constituirse equipos de mejora encargados de analizar todas las quejas y sugerencias.
- b) En cada consejería y ente del sector público instrumental deben constituirse equipos de mejora encargados de analizar todas las quejas y sugerencias.
- c) Los equipos de mejora deben constituirse en el seno de los órganos y entes a los que les es de aplicación el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
- d) En cada consejería y ente del sector público instrumental deben constituirse equipos de mejora o unidades administrativas especializadas encargados de analizar todas las quejas y sugerencias.



105. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿Debe motivarse la solicitud de acceso a la información?

- a) Deberá estar motivada.
- B)No debe motivarse en ningún caso.
- c) No es obligatorio a motivar la solicitud, sin embargo, se puede motivar.
- D)La ausencia de motivación puede ser por si sola causa de rechazo de la solicitud.

106. De acuerdo con la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, corresponde al consejero competente en materia de hacienda y presupuestos:

- a) Acordar el límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, y someter el acuerdo correspondiente a la deliberación del Parlamento de las Islas Baleares.
- b) Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de cada año y remitirlo al Parlamento de las Illes Balears.
- c) El establecimiento, modificación y supresión de recargos sobre los tributos estatales.
- d) Proponer al Consejo de Gobierno el límite máximo del gasto no financiero.



107. Indicar la respuesta correcta con sujeción estricta al principio de jerarquía normativa. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:

- a) Por los convenios colectivos, por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados, por los usos y costumbres locales y profesionales.
- b) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, por los convenios colectivos, por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados, por los usos y costumbres locales y profesionales.
- c) Por los convenios colectivos, por los usos y costumbres locales y profesionales, por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados.
- d) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos, por los convenios colectivos, por los usos y costumbres locales y profesionales.

108. Según el art. 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos que tengan un contenido imposible son:

- a) Nulos de pleno derecho.
- b) Anulables.
- c) Anulables cuando sean dictados por el órgano competente y nulos cuando sean dictados por un órgano manifiestamente incompetente.
- d) Nulos o anulables en función de la jerarquía del órgano que haya dictado la disposición.



109.- Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde:

- a) A los órganos superiores competentes por razón de la materia.
- b) A los órganos inferiores competentes por razón de la materia y el territorio.
- c) A los órganos inferiores que tengan competencia únicamente por razón del territorio.
- d) A los órganos superiores competentes por razón del territorio y la materia.

110. El principio de legalidad se establece en la Constitución en:

- a) El artículo 2.
- b) El artículo 9.
- c) El artículo 104.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.